

O-29219

PAIDEIA S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDÓN S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO

Mar del Plata.

VISTOS estos **AUTOS** caratulados "Paideia S.R.L. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de derechos – Otros juicios" (O-29219), en trámite por ante este Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 2 de Mar del Plata, traídos a despacho a los fines del dictado de la sentencia definitiva, y de los cuales,

RESULTA:

I. 1. Que, con fecha 14-VI-2022, se presentó la firma Paideia S.R.L. (CUIT 30-54130018-6), representada por su socio gerente, y con patrocinio letrado, e interpuso formal demanda contencioso administrativa de reconocimiento o restablecimiento de derecho, a los efectos que se reconozca a la actora el derecho de tributar la Tasa por Servicios Urbanos en los términos ya decididos en diferentes acciones judiciales firmes y consentidas, de conformidad con principios rectores para el tipo de tributo en cuestión.

2. Luego de detallar los recaudos de admisibilidad de la pretensión, relató que, pese a haber obtenido sentencias favorables en otras causas (Exp. nº 20.772 y nº 24.219 de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 departamental y Exp. O – 25639 de trámite por ante este Juzgado) en donde se ha cuestionado el tributo de marras y se logró modificar la forma de cobro de la Municipalidad, con relación a los periodos 2016, 2017 y 2018, la firma Paideia S.R.L. lejos se encuentra de obtener una resolución definitiva a su situación impositiva.

A su respecto sostuvo que, atento a que ya se ha resuelto cómo debería tributar la actora la tasa en cuestión -mientras la normativa dictada para cada ejercicio se mantenga idéntica o similar- debería poder ingresar la gabela en esas condiciones, considerando un dispendio judicial innecesario blandir año a año una acción para dicho reconocimiento.

Aseguró que no conteniendo dichas sentencias una pauta a futuro, el Municipio no reconoce la forma de tributar, sometiendo a la firma a demandas anuales que terminan expresando idénticos resultados.

Propuso se le reconozca a la firma Paideia S.R.L. el derecho de tributar la tasa en las condiciones establecidas en los citados pronunciamientos judiciales, sin necesidad de efectuar una demanda año tras año, mientras se mantenga idéntica normativa.

3. A su vez, efectuó un claro cuestionamiento a la Tasa por Servicios Urbanos en el entendimiento de que la norma que la contempla transgrede el principio de legalidad y reserva de ley dada la imposibilidad de determinar los elementos constitutivos de la misma, como son la efectiva prestación del servicio, o bien, la razonable proporción del monto que se pretende en cobro.

Aseguró que la Ordenanza Fiscal para los ejercicios 2019 a 2022 continúa explicitando -como desde 2016- un hecho imponible difuso e ilimitado. La cantidad, variedad y ambigüedad que patentiza la citada normativa afecta directamente el principio de legalidad, transformando la tasa en impuesto, no pudiendo corroborarse y controlarse respecto de todas esas actividades si el contribuyente se encuentra abonando una porción razonable, si el servicio se presta efectivamente y si atañe individualmente a la actora.

Agregó que, si bien en el art. 71, in fine, de la Ordenanza Fiscal, se alude a “*otros servicios*”, clasificados por zonas, que insumen -en el caso concreto- el 44,8 % del total de la tasa, la Ordenanza Impositiva para el ejercicio 2022, en el art. 3 b) tampoco explica en qué consisten esos “*otros servicios*”.

Por otra parte, cuestionó la estimación de la base imponible de la tasa, así como los aumentos de ésta, por entender que no encuentran fundamento legal ni sustento en la realidad.

Por último, dejó sentado que los períodos involucrados se encuentran gravemente afectados por la nula actividad acaecida durante la pandemia, producto de las medidas sanitarias tomadas por el Poder Ejecutivo, siendo casi nulo el servicio prestado, no obstante, la tasa en cuestión no sólo no bajó su valor, sino que se fue incrementando desmedidamente.

En función de ello, y luego de citar doctrina y jurisprudencia en sustento de sus argumentos, solicitó se declare su inconstitucionalidad para los ejercicios 2019 a 2022.

4. Con todo ello, solicitó se haga lugar a la acción de reconocimiento de derecho, estableciendo la forma en que la institución debe tributar el impuesto, ordenando al Municipio a modificar el estado de deuda desde 2019 a 2022 y a futuro, según los parámetros de los pronunciamientos que son base de la presente demanda, decretando, en su caso, la inconstitucionalidad de la Tasa por Servicios Urbanos, con costas a la demandada.

5. Ofreció prueba y reservó el caso federal.

II. Que, con fecha 22-VI-2022, se declaró que la pretensión resultaba *prima facie* admisible y se ordenó correr traslado de la demanda a la Municipalidad de General Pueyrredón, conforme las normas que rigen el trámite del proceso ordinario ante este fuero.

III. 1. Que, con fecha 15-IX-2022, se presentó -por apoderado- la Municipalidad de General Pueyrredón y contestó la demanda, solicitando su íntegro rechazo.

Luego de efectuar una negativa genérica/específica trató los hechos expuestos en la demanda y los antecedentes del caso, y sostuvo que, si bien los tres procesos judiciales referenciados tuvieron resultado adverso para la comuna, los argumentos de las sentencias recaídas sirvieron para modelar el hecho imponible de la Tasa por Servicios Urbanos, dejando de lado su indeterminación oportunamente cuestionada.

Aseguro que el texto de la Ordenanza 24.267 (fiscal año 2019) ha aclarado que la descripción “*Otros Servicios*” corresponde a los descriptos en el artículo 68º de ésta.

Idéntica fórmula se ha repetido en la normativa tributaria correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 describiendo pormenorizadamente a qué actividades particulares corresponde ese concepto.

Con ello, aclaró que mal puede negar el actor que el establecimiento se encuentra sobre una calle asfaltada a la que se le realiza mantenimiento, que se realizan controles vehiculares reiteradamente en el lugar al momento de la salida de los alumnos, que se efectúa un control de seguridad tanto con las patrullas municipales como con el sistema de cámaras y que se mantiene y conserva la plaza que se encuentra a escasas cuadras del establecimiento.

Afirmó que la pretensión de la actora no puede ser de recibo, por cuanto cada uno de esos procesos judiciales ha tenido su particularidad y se ha sustanciado frente a textos de la Ordenanza Fiscal que difieren del marco actual.

A su vez, sostuvo que el Honorable Concejo Deliberante podría volver a modificar la gabela para el año siguiente y esto necesariamente requeriría una nueva intervención del poder judicial para escrutar la legalidad o constitucionalidad del precepto tributario.

2. Por otra parte, y con cita de jurisprudencia, objetó las manifestaciones vertidas por la parte actora en cuanto al alegado incremento del gravamen en más del 300%.

Hizo lo propio acerca de la prestación efectiva del servicio. Aclaró que resulta aceptable por la jurisprudencia que para la fijación de la cuantía de una tasa retributiva de servicios públicos se tome en cuenta, no sólo el coste efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, sino también la capacidad contributiva de los mismos representada por el valor del inmueble o el de su renta, a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad.

Finalmente, cuestionó la alegada inconstitucionalidad de la base imponible. Dejó sentado, en lo que resulta de interés que, dada la naturaleza y características del tributo en cuestión, la manifestación de capacidad contributiva considerada no ha sido ni la capacidad de adquirir riqueza (renta) ni el consumo de la riqueza (gasto), sino la posesión de la riqueza, es decir, el patrimonio de la firma, con lo que las utilidades de la empresa constituyen un dato menor.

Aseguró que la actora pretende desentenderse por completo de su patrimonio como inobjetable manifestación de capacidad contributiva y desviar la atención del juzgador exclusivamente a sus utilidades como si aquel no existiera.

Remarcó que la exigibilidad de las obligaciones tributarias no puede quedar supeditada a la situación personal y financiera de cada contribuyente en cada momento.

3. Por último y, como reflexión final, entre otras consideraciones, adujo que la divisibilidad o no del servicio público es una cuestión económica que no altera la naturaleza jurídica de la tasa, si hay prestación efectiva del servicio y este afecta directa o indirectamente al sujeto pasivo, sea en particular o como miembro de la comunidad, la tasa retributiva es legítima.

Ofreció prueba e introdujo el Caso Federal.

IV. Que, con fecha 18-V-2023, frente a la existencia de hechos conducentes y controvertidos se ordenó la apertura a prueba de la causa y se proveyó la producción de los medios de prueba ofrecidos.

V. Que, con fecha 7-III-2024, obra el certificado que dio cuenta del vencimiento del plazo por el cual fueron abiertas a prueba las actuaciones y del resultado al que arribó cada uno de los medios de prueba cuya producción fuera proveída.

VI. Que, con fecha 19-III-2024, los autos fueron puestos en Secretaría a fin que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba producida. De dicho derecho hizo sólo uso la parte demandada, con fecha 11-IV-2024.

VII. Que, con fecha 25-IV-2024, se ordenó el llamado de autos a los efectos del dictado de la sentencia definitiva. Proveído que se encuentra firme.

Y CONSIDERANDO:

I. 1. Que, en forma previa al tratamiento de las cuestiones planteadas, se impone un reordenamiento a los efectos de dejar claramente establecido cuáles son las pretensiones deducidas por la parte actora, puesto que si bien, en apariencia, parecería que se tratara de una sola, en lo personal entiendo que, al menos, coexisten dos. Al tiempo que corresponde, asimismo, precisar cuáles pretensiones no han sido motorizadas con la consistencia y precisión adecuada, lo que me impide, en función de las reglas de la congruencia, abordar las mismas.

Así, del desarrollo que contiene el escrito liminar puedo interpretar que el objeto de la acción se direcciona a la obtención de un reconocimiento de derecho a la actora -con fundamento en la inconstitucionalidad de la norma- a tributar la Tasa de Servicios Urbanos (en adelante, TSU), en la forma y con el alcance dispuesto en precedentes jurisprudenciales, por los períodos 2019 a 2022, y, a su vez, que dicha forma de tributar se mantenga a futuro en relación a los ejercicios fiscales posteriores, en tanto la normativa a aplicar mantenga idénticas condiciones.

Como puede apreciarse, nos encontramos frente a una pretensión de reconocimiento de derechos, en la cual la propia demanda establece un lapso temporal del año 2019 a 2022 y, acto seguido, refiere de una situación a futuro.

Ese planteo actoral -en la forma plasmada- denota una ostensible bifurcación de las pretensiones y, con ello, los razonamientos que corresponde realizar han de ser separados.

Con lo cual, corresponde, por un lado, brindar tratamiento a la pretensión de reconocimiento de derecho relativo a la inconstitucionalidad de las normas que regulan la TSU, por los períodos 2019 hasta 2024, puesto que si bien la demanda así no lo precisa, lo cierto es que la misma refiere a futuro, lo que implícitamente permite tener por comprendidos no sólo los períodos 2019 a 2022 sino también los relativos al ejercicio fiscal 2023 y 2024, dado que ya se encuentran en vigencia las Ordenanzas fiscales e impositivas para éstos últimos años.

Con ello, corresponde destacar que el tratamiento de la pretensión de reconocimiento de derecho -fundada en la inconstitucionalidad de las normas- quedará circunscripto a los ejercicios fiscales del año 2019 a 2024 de la TSU, creadas por Ordenanza Fiscal 24.267 y Ordenanza Impositiva 24.268; Ordenanza Fiscal 24.706 y Ordenanza Impositiva 24.707; Ordenanza Fiscal 24.958 y Ordenanza Impositiva 24.959; Ordenanza Impositiva 26.192 y Ordenanza Fiscal 26.193, todas ellas, con relación a la cuenta n° 4923/0 de titularidad de Paideia S.R.L.

2. Pero la cuestión no se agota allí, pues el segundo de los cuestionamientos introducidos por la actora, también bajo el ropaje de una pretensión de reconocimiento de derechos, se direcciona hacia una situación futura. Concretamente dicha pretensión refiere a imponer conductas o límites a la labor legislativa del Municipio.

Si bien dicho reclamo podría ser encauzado a través del carril de una pretensión de reconocimiento de derecho, como en la especie, lo cierto es que pretender forzar o imponer a la comuna a efectuar determinada conducta a futuro, que incida directamente sobre el diseño de toda una estructura impositiva, importaría abordar una función que resulta ajena al rol jurisdiccional de quien suscribe.

Además de ello, no puedo soslayar, que las particularidades de la pretensión intentada colocan a la decisión judicial en un plano extremadamente conjetural y desprovisto de toda precisión, más aún, si se tiene en cuenta la frecuencia anual con la que se renuevan las ordenanzas fiscales e impositivas del Municipio, amén de aquellas modificaciones que pudieren tener lugar durante el año mediante nuevas ordenanzas.

Téngase presente que el derecho cuyo reconocimiento se persigue, respecto a cuál sea el contenido de un acto legislativo futuro y cuál será la aplicación de esa ordenanza impositiva en el tiempo, son actos conjeturales que exceden a esta pretensión y resultan ajenas a lo que en este proceso se está debatiendo.

El intento que la demanda realiza en torno a circunscribir esa conducta futura, relacionándola con el hecho de que la norma tributaria por venir tenga la misma característica que las impugnadas, demuestra, en su imprecisión, que es un esfuerzo condenado al fracaso. Como se verá más adelante, las normas implicadas no han sido impugnadas en su totalidad sino en puntuales aspectos de las mismas, que refieren a la descripción de los servicios conectados con la tasa; es una posibilidad cierta que determinados artículos que en las configuraciones actuales de tales normas podrían ser considerados inconstitucionales, en el contexto de otras configuraciones, que complementen los artículos inválidos, tornen a estos como compatibles con el plexo constitucional.

Resulta manifiesto, por otra parte, que la labor legisferante no puede estar sometida a un control previo que encorsete la función, extralimitando el ámbito natural en que la función jurisdiccional se puede desplegar, por lo que la pretensión

de reconocimiento de derecho, en relación a la actividad futura de la comuna merece ser rechazada.

3. El rechazo que antecede dispara la necesaria consideración de una cuestión que considero relevante en la especie, y es que claramente la demanda no exhibe ningún tipo de pretensión resarcitoria.

En efecto, parecería vislumbrarse que hay cierto reproche en la demanda que apuntaría a que la comuna, después de transitar los diversos estrados de la Justicia - con relación a los anteriores procesos-, habría continuado legislando durante el periodo 2019-2022 del mismo modo en que lo venía haciendo, de forma mecánica y desatendida de los pronunciamientos ya emitidos. Conducta que la actora, amén de reputarla inconstitucional, presupone o anticipa se va a prolongar hacia el futuro.

En definitiva, considero que si el Municipio tiene una conducta reiterada a la hora de ejercer su potestad legislativa, que se muestra reñida con lo que insistentemente la Justicia le viene resolviendo, tal proceder, podría replicar en responsabilidad del Estado por actividad normativa ilícita.

Es que, si el Estado legislador actúa transgrediendo el derecho, esa conducta resultará generadora de responsabilidad, la que deberá ser exigida en el marco de una pretensión resarcitoria y siempre que se den las siguientes circunstancias: i) encontrarnos ante la privación de un derecho de propiedad de un particular, o en sus atributos esenciales para que sea indemnizable; ii) tal privación, total o parcial, debe implicar la real imposibilidad de ejercer el derecho en la medida que se lo venía haciendo; iii) la norma no debe haber sido dictada para enervar la propia conducta del particular o por su condición propia o la de las cosas de su patrimonio; iv) esa lesión debe provenir necesariamente de un trato desigualitario; v) el nexo causal debe ser directo e inmediato, o sea, encontrarse libre de interferencias (v. Aberastury, Pedro *“Responsabilidad del Estado por Actividad Normativa”* en la obra colectiva *“Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público”* Jornadas organizadas por la Universidad Austral – Facultad de Derecho, págs. 130-131, Ed. Ciencias de la Administración División Estudios Administrativos, Buenos Aires, 2001).

A lo que corresponde agregar que toda acción resarcitoria presupone la existencia de daño y, necesariamente -en el particular- ese daño deberá ser consecuencia directa de la actividad desplegada por la autoridad.

En concreto para que se configure la responsabilidad por daños son requisitos ineludibles la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre la conducta fundamento del reclamo y el perjuicio invocado, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al Estado. Obviamente que ese concepto se diferencia de la mera cuantificación de la medida de un derecho cuya existencia o reconocimiento se pretende, como acontece con la eventual devolución de importes abonados por tributos declarados ilegítimos, cuestión que no es más que un aspecto de toda pretensión anulatoria o de reconocimiento de derecho.

Por consiguiente, se requiere ineludiblemente la acreditación del daño con un grado de certeza necesario para la procedencia de su reparación.

En esta hipotética configuración pretensional no se limita *a priori* la función legislativa, sino que, constatada la existencia de los recaudos que disparan la responsabilidad estatal, atribuyen a la conducta ilícita un contenido reparatorio, ulterior a su ejercicio y que no difiere de cualquier otro supuesto de responsabilidad estatal.

Como quiera, en este proceso ningún daño ha sido referido, que muestre autonomía en relación a la lógica improcedencia de tributos conectados a normas inconstitucionales, de modo tal que, aunque sea implícitamente, permita vislumbrar la existencia de pretensiones formuladas en los términos del art. 12, inc. 3° del CPCA.

II. 1. a. Que, delimitado el marco de debate, y teniendo en consideración que la pretensión de la actora se encuentra enderezada a obtener el reconocimiento al derecho de tributar la TSU con el alcance y en los términos decididos en diversos procesos judiciales previos, decretándose, en su caso, la inconstitucionalidad de las ordenanzas municipales relacionadas con los ejercicios fiscales en juego, estimo prudente efectuar una breve descripción de lo acontecido en las causas de referencia.

Así, destaco que dos de los procesos señalados por la parte actora (Exp. 20.772 y Exp. 24.219) tramitaron por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1 departamental, así como por ante la instancia superior, mientras que el tercero de ellos (Exp. O-25639) tramitó por ante este Juzgado, así como por ante la Alzada departamental. Veamos.

b. En la causa 20.772, iniciada el 16-VI-2017, la crítica se focalizó en las ordenanzas de los años fiscales 2016 y 2017; el 4-VI-2018 se dictó sentencia de primera instancia, donde se receptó la demanda, declarándose la inconstitucionalidad de específicos artículos de las cuatro ordenanzas implicadas (dos fiscales y dos impositivas, cada una de los años 2016 y 2017, respectivamente) al concluir que la indefinición ("*otros servicios*") que contiene la norma impugnada resulta contraria al principio de legalidad que rige la materia. A su vez, se ordenó el pago de la gabela (por la totalidad de esos dos años) conforme las reglas de las normas vigentes durante el período fiscal 2015.

En la Alzada, la causa tramitó como C-8301-MP1 y recibió sentencia el 25-X-2018. Allí se confirmó la inconstitucionalidad dictada en la instancia anterior (sobre los artículos individuales de cada una de las cuatro normas invalidadas) y se rechazó el recurso. En cuanto a la utilización del año 2015 como pauta de liquidación de la TSU, el tribunal puso de manifiesto que ello era un apartamiento de la doctrina fijada en C-2968-BB1 *Greco*, pero que ello era, en el caso, la única opción existente, por lo que validó esa solución (considerandos 4.1 y 4.3). No obstante, se aclaró en el considerando 4.4 que ello sería así sólo con efectos hacia el futuro, a partir de la fecha de interposición de la demanda (esto es, 16-VI-2017). La evidente circunstancia que se estaban invalidando normas para el ejercicio 2016 pero sobre las cuales se excluían los efectos de la sentencia (porque eran previos a la demanda), no fue tratado ni las partes pidieron aclaraciones sobre el particular.

Interpuesto y concedido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tramitó ante la SCBA en A-75.917, donde el tribunal declaró mal concedido ese recurso, el 24-VI-2020, brindándole efectos de cosa juzgada a lo resuelto por la Cámara.

c. La segunda es la causa 24.219, iniciada el 23-VIII-2018. Aquí el cuestionamiento es idéntico, pero referido a la totalidad del año fiscal 2018. Allí se dictó sentencia el 9-VIII-2019, en el mismo sentido de la causa anterior. Destaco, no obstante, que en considerando 8º específicamente se consideró incoherente declarar inconstitucional una norma, para aplicarla a una porción del año y no a otra, por lo que, por todo el año 2018, debía utilizarse las normas del año fiscal 2015.

En la Alzada tramitó en C-9336-MP1, donde se dictó sentencia definitiva el 7-VII-2020. Frente a la apelación de la comuna, su recurso fue rechazado, confirmándose lo resuelto en la instancia anterior y sin brindar tratamiento alguno a lo consignado en el punto anterior, ordenó que los efectos de ese proceso lo sean –igual que en anterior– desde la demanda. El recurso extraordinario fue denegado, por lo que este proceso también cuenta con cosa juzgada.

d. Finalmente, en la tercera de las causas, identificada como O-25639, de trámite por ante este Juzgado, iniciada con fecha 14-III-2019, por intermedio de una pretensión anulatoria se cuestionó la procedencia del cobro de la TSU por diversos períodos temporales; el 5-II-2021 se dictó sentencia, en donde se receptó la demanda, declarándose la inconstitucionalidad de específicos artículos de las ordenanzas implicadas (tres fiscales y tres impositivas, cada una de los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente) por considerar que el Municipio reincide en la postura procesal ya reprochada. Asimismo, se dispuso la anulación de las liquidaciones de tributos previstos en tales normas por un período específico y se determinó el modo de cancelación del tributo -mediante un expreso mecanismo- conforme las reglas de las normas vigentes durante el período fiscal 2015.

En la Alzada tramitó en C-10742-MP2, donde se dictó sentencia definitiva el 11-V-2021. El recurso de apelación de la comuna fue desestimado -por insuficiente-, confirmándose lo resuelto en esta instancia.

Como puede apreciarse -sin un mayor esfuerzo- del derrotero procesal descripto, para cada una de las causas reseñadas, surge un denominador común, esto es, la declaración de inconstitucionalidad de específicos artículos de las Ordenanzas municipales involucradas -fiscales e impositivas- que incidían sobre la cuenta fiscal 4923/0 de la actora, a través de la TSU.

2. Con ello en mira, he de destinar mi labor a brindar tratamiento a la inconstitucionalidad de las normas tributarias que sirvieran como base a las liquidaciones en juego.

De los postulados de la actora puede inferirse que aquellos apuntan a cuestionar la TSU desde distintas ópticas; no obstante, resulta notorio que el mayor esfuerzo argumentativo lo ha efectuado en miras a resguardar su postura en lo relativo a la indeterminación del hecho imponible y la falta de acreditación de la prestación del

servicio -conceptos que guardan una estrecha vinculación entre sí- ello, como valladar para la efectiva percepción de la pretensión fiscal consagrada en las liquidaciones impositivas.

En este discurrir, estimo oportuno reiterar la doctrina fijada que impera en la materia, en cuanto a que, en el contexto de una tasa, debe existir por parte del Estado la prestación de un servicio concretamente individualizado en relación al sujeto pasivo del tributo (Fallos 312:1575; 329:792; 332:1503; 335:1987).

A su vez, se tiene dicho, que no satisface el test de constitucionalidad la mera organización de un servicio o la prestación de tal servicio a sujetos ajenos a la relación tributaria examinada.

Lo relevante no es otra cosa que la vinculación directa entre servicio y contribuyente.

En efecto, la comuna no ha empeñado el menor esfuerzo, tendiente a demostrar la existencia de sustento fáctico que contradiga las afirmaciones de la actora, en lo que hace a la individualización de los servicios y, por sobre todo, la forma en que los mismos se encuentran concretamente vinculados a la firma actora, mediante la prestación directa de ese servicio.

Es que, ante esa indeterminación, resulta lógico que la Municipalidad no pueda individualizar servicio alguno en cabeza de la actora.

Repárese en este punto que la comuna, en un intento de justificar su obrar legislativo, puso de relieve que con el dictado de la Ordenanza 24.267 (fiscal del año 2019) se suplió la falta de determinación que portaba el hecho imponible con relación a los *“otros servicios”*, desde el momento en que se introdujo en la norma el agregado *“los otros servicios son los detallados en el art. 68”*. Idéntica fórmula aseguró que se ha aplicado en la normativa atinente a los años 2020, 2021 y 2022, describiendo a qué actividades particulares corresponde ese concepto.

Si bien, la introducción de ese componente intenta brindar respuesta a la falta de individualización de los servicios -que redundó en agravio al principio de legalidad-, lo cierto es que con ello no se satisface el recaudo exigido en la materia, esto es, que la efectiva prestación de los servicios que da origen a la tasa se encuentre concretamente vinculada al inmueble urbano de titularidad de la firma actora.

Tomando a modo de ejemplo la Ordenanza Fiscal 24.267 (2019) que fuera citada por el propio apoderado de la comuna, se puede apreciar que el art. 68 efectúa una vasta enumeración de servicios de los cuales puedo advertir que algunos de ellos podrían eventualmente guardar algún tipo de conexión directa con el inmueble de la firma actora, mientras que respecto de otros la conexión se muestra un poco más mediatizada, aunque aún podría llegar a concebirse algún nivel de conexión, y otros que no guardan ninguna relación con un servicio referido concretamente al inmueble del contribuyente.

Adelanto que el reseñado artículo impone para su análisis un acentuado esfuerzo interpretativo dada su dificultosa redacción, por cuanto a algunos de los supuestos los separa sintácticamente por punto y coma, como si guardaran una clara vinculación

entre los miembros del enunciado, cuando en realidad podría indicarse que se trata de enunciados independientes que no guardan relación entre sí. Veamos.

Expresamente la norma establece *“Por los servicios de alumbrado público, recolección y traslado de residuos domiciliarios y poda, higiene urbana manual, mecánica y/o mixta, mantenimiento y conservación de calles pavimentadas y/o engranzadas, la señalización, ordenamiento y control del tránsito vehicular; por la forestación, equipamiento, mantenimiento, conservación y aseo de edificios públicos municipales, playas, parques, plazas, paseos, rotondas, retiros y canteros centrales de calles, avenidas y/o bulevares; por el control de aplicación de normas sobre zonificación y urbanización; por programas de promoción de la cultura, la innovación y la tecnología y el desarrollo productivo; por servicios prestados por Defensa Civil, y de seguridad ciudadana; por la promoción de programas de Desarrollo y la inclusión social: sostenimiento de institutos, hogares y casas de admisión de jóvenes, discapacitados, ancianos y, en general, personas en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, se abonará la tasa que al efecto fije la Ordenanza Impositiva de acuerdo a las normas establecidas en el presente Título”*.

Así, advierto -a modo de ejemplo- que claramente el servicio de alumbrado público, la recolección y traslado de los residuos domiciliarios y poda e higiene urbana, como el mantenimiento y conservación de calles pavimentadas, pueden llegar a guardar una conexión con el concepto de propietario de un inmueble urbano, en el caso de autos la actora.

Ahora bien, otros de los servicios allí enumerados como *“la promoción de programas de Desarrollo y la inclusión social: sostenimiento de institutos, hogares y casas de admisión de jóvenes, discapacitados, ancianos y, en general, personas en situación de riesgo y/o vulnerabilidad”* no permiten atribuirle vinculación alguna con una prestación que beneficie al inmueble titularidad de la firma actora.

Por más que se quiera, tal proceder no conmueve la conducta oportunamente reprochada, puesto que en modo alguno el Municipio pudo acreditar que aquellos servicios que la norma detalla guardan estrecha vinculación con una prestación que beneficie en forma concreta y efectiva al inmueble titularidad de la actora.

Es que, tal actividad probatoria resulta exigible a la comuna si pretende -como en el caso de autos- la demostración de la efectiva prestación del servicio a la actora.

Al describir la norma un hecho imponible genérico e impreciso con múltiples servicios, conteniendo prestaciones direccionadas a la población toda -sin distinción alguna-, imposibilita corroborar la estricta correspondencia del tributo con los servicios efectivamente prestados, además e impedir chequear si el monto fijado resulta razonable y guarda la necesaria proporcionalidad con su costo (en los términos de Fallos 335:1987 – “Quilpe S.A.”-).

En ese sentido se pronunciado la Alzada departamental al sostener que *“la técnica legislativa utilizada por la autoridad municipal, al abordar de manera indiscriminada múltiples servicios -todos ellos constitutivos del hecho imponible-, atenta contra la*

posibilidad de individualizar con la precisión exigible cuál o cuáles de todos ellos se concretan con relación a los actores... Tampoco puede la Comuna pretender escudarse en la efectiva prestación del servicio aunque con relación a otros contribuyentes ajenos a la relación tributaria examinada (CCAMP, C-7338-BB1 “Los Cipreses de Bahía S.A.”, sent. del 26-IV-2018).

A su vez, téngase presente que de la prueba documental agregada por la demandada (Exp. 2048/2, año 2022) no consta elemento alguno que revele la producción del hecho imponible y que permita demostrar la vinculación directa entre el servicio y el contribuyente.

Para más, no pasa inadvertido que al vencimiento del plazo probatorio la única prueba ofrecida por la demandada -a la Secretaría de Seguridad- tendiente a demostrar la efectiva prestación de algunos de los servicios que manda la norma, se encontró pendiente de producción.

Ello me lleva al convencimiento de que el Municipio, no solo en relación a aquellos servicios en los que claramente no existe vinculación con una prestación en beneficio del inmueble en cuestión, sino también respecto de aquellos que pudieran llegar a tener alguna conexión clara, visible e inmediata o, bien, mediatizada, no ha acreditado prueba que permita tener por comprobada la efectiva prestación de los servicios referido concretamente al contribuyente Paideia S.R.L., durante los períodos involucrados -2019 a 2024-, concurrencia que estimo necesaria para la exigencia del pago de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU).

En tal contexto no se refleja un obrar diligente y responsable de la Administración en la prestación del servicio remunerado por la tasa. Ello tiene un directo correlato en la relación jurídica tributaria, pues excluye al actor de su condición de sujeto pasivo del tributo, no configurándose a su respecto el hecho imponible.

3. En conclusión, ante la demostrada falta de prestación de los servicios por parte de la la comuna, estrechamente vinculados con el inmueble titularidad del Colegio Carlos Saavedra Lamas, sito en calle 20 de septiembre n° 1157 de esta ciudad, cabe receptar la posición actoral, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 68 y 71 del Anexo I de la Ord. 24.267 y art. 3º, inc. “b” del Anexo I de la Ord. 24.268; arts. 68 y 71 del Anexo I de la Ord. 24.706 y art. 3º, inc. “b” del Anexo I de la Ord. 24.707, arts. 68 y 71 del Anexo I de la Ord. 24.958 y art. 3º, inc. “b” del Anexo I de la Ord. 24.959; arts. 68 y 71 del Anexo I de la Ord. 26.193 y art. 3º, inc. “b” del Anexo I de la Ord. 26.192, correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 a 2024, por la TSU respecto de la cuenta n° 4923/0.

4. No obstante lo aquí resuelto, entiendo que permanece incólume el derecho de la comuna a liquidar nuevamente la gabela reseñada, utilizando para ello el régimen normativo vigente durante el año fiscal 2015, como fuera resuelto en los procesos previos.

III. Que, en relación con las costas, atento que en la especie claramente ha habido un vencimiento parcial y mutuo -puesto que una pretensión prospera y otra no-

considero, teniendo en mira el peso argumentativo y la labor profesional desplegada en autos, que la primera de las pretensiones ostenta una incidencia mucho más relevante que la segunda.

En tal sentido, estimo apropiado imponer las costas en un 80% al Municipio y en un 20% a la actora (art. 51, inc. 1º del CPCA, texto según Ley 14.437);

Por todo lo expuesto, **RESUELVO:**

1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda impetrada por la firma Paideia S.R.L. (CUIT 30-54130018-6) contra la Municipalidad de General Pueyrredón, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 68 y 71 del Anexo I de la Ord. 24.267 y art. 3º, inc. “b” del Anexo I de la Ord. 24.268; arts. 68 y 71 del Anexo I de la Ord. 24.706 y art. 3º, inc. “b” del Anexo I de la Ord. 24.707, arts. 68 y 71 del Anexo I de la Ord. 24.958 y art. 3º, inc. “b” del Anexo I de la Ord. 24.959; arts. 68 y 71 del Anexo I de la Ord. 26.193 y art. 3º, inc. “b” del Anexo I de la Ord. 26.192, y reconocer el derecho a la actora a tributar la TSU, con relación a la cuenta fiscal 4923/0, por los períodos 2019 al 2024, conforme el régimen normativo vigente durante el año fiscal 2015.

2º) Imponer las costas del presente juicio en un 80% al Municipio y en un 20% a la actora (art. 51, inc. 1º del CPCA, texto según Ley 14.437);

3º) Diferir la regulación para su oportunidad (art. 51, ley 14.967).

Regístrese.